

Sesión:	TRIGÉSIMA ORDINARIA
Fecha:	08 DE AGOSTO DE 2017
Hora:	12:00 horas.
Lugar:	Ciudad de México Reforma 211-213, Salón Justicia.

ACTA DE SESIÓN

INTEGRANTES

1. **Mtra. Delia Ludivina Olmos Díaz.**
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.
En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF., 9.V.2016).
2. **Lic. Adriana Fabiola Rodríguez León.**
Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, Responsable del Área Coordinadora de Archivos en la Dependencia.
En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
3. **Lic. Luis Grijalva Torrero.**
Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República.
En términos de lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF., 9.V.2016).

ORDEN DEL DÍA

- I. **Aprobación del Orden del Día.**
- II. **Lectura y aprobación de Acta de la Sesión inmediata anterior.**
- III. **Análisis y resolución de las solicitudes de información.**
 - A. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o confidencialidad:**
 - A.1. Folio 0001700189117
 - A.2. Folio 0001700197317
 - A.3. Folio 0001700200417
 - A.4. Folio 0001700200617
 - A.5. Folio 0001700201017
 - A.6. Folio 0001700206917
 - A.7. Folio 0001700208717
 - A.8. Folio 0001700208817
 - A.9. Folio 0001700210417
 - A.10. Folio 0001700220417
 - A.11. Folio 1700100026517 – Agencia de Investigación Criminal
 - A.12. Folio 1700100027917 – Agencia de Investigación Criminal
 - A.13. Folio 1700100028417 – Agencia de Investigación Criminal
 - A.14. Folio 1700100028517 – Agencia de Investigación Criminal
 - B. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de los documentos requeridos:**
 - B.1. Folio 0001700187417
 - B.2. Folio 0001700187517
 - B.3. Folio 0001700187617
 - B.4. Folio 0001700187917
 - B.5. Folio 0001700211217
 - B.6. Folio 0001700213617
 - C. **Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de término:**
 - C.1. Folio 0001700192017
 - C.2. Folio 0001700197417
 - C.3. Folio 0001700197617
 - C.4. Folio 0001700198117
 - C.5. Folio 0001700198217
 - C.6. Folio 0001700198317
 - C.7. Folio 0001700198417
 - C.8. Folio 0001700198517

- C.9. Folio 0001700198617
C.10. Folio 0001700198717
C.11. Folio 0001700198817
C.12. Folio 0001700198917
C.13. Folio 0001700199017
C.14. Folio 0001700199117
C.15. Folio 0001700199217
C.16. Folio 0001700199317
C.17. Folio 0001700199417
C.18. Folio 0001700199517
C.19. Folio 0001700199617
C.20. Folio 0001700199717
C.21. Folio 0001700199817
C.22. Folio 0001700199917
C.23. Folio 0001700200017
C.24. Folio 0001700200117
C.25. Folio 0001700200217
C.26. Folio 0001700200717
C.27. Folio 0001700202317
C.28. Folio 0001700202617
C.29. Folio 0001700202917
C.30. Folio 0001700203017
C.31. Folio 0001700203717
C.32. Folio 0001700205217
C.33. Folio 0001700205817
C.34. Folio 1700100025717 – Agencia de Investigación Criminal

D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analizan los cumplimientos a las resoluciones del INAI.

- D.1. Folio 0001700134817 – RRA 3763/17

E. Asuntos Generales.

[illegible]

ABREVIATURAS

- PGR** – Procuraduría General de la República.
- OP** – Oficina del C. Procurador General de la República.
- SJAI** – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.
- SCRPPA** – Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.
- SEIDO** – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.
- SEIDF** – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
- SDHPDSC** – Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
- AIC** – Agencia de Investigación Criminal.
- OM** – Oficialía Mayor.
- CAIA** – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.
- CGSP** – Coordinación General de Servicios Periciales.
- COPLADII** – Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.
- CENAPI** – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.
- PFM** – Policía Federal Ministerial.
- FEADLE** – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.
- FEPADE** – Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.
- FEVIMTRA** – Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.
- UEAF** – Unidad Especializada en Análisis Financiero.
- UTAG** – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.
- DGCS** – Dirección General de Comunicación Social.
- DGALEYN** – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.
- VG** – Visitaduría General.
- INAI** – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
- LFTAIP** – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- CFPP** – Código Federal de Procedimientos Penales
- CNPP** – Código Nacional de Procedimientos Penales.

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.

ACUERDOS

- I. Aprobación del Orden del Día.
- II. Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.
- III. Análisis y resolución de las solicitudes de información para su análisis y determinación:
 - A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o confidencialidad:

A.1. Folio 0001700189117

Contenido de la Solicitud: *"Solicito se me informe el monto erogado por la compra, renta o cualquier acuerdo convenido para equipo tecnológico, de comunicaciones e inteligencia, o equipos de extracción de datos, desde el año 2007 y hasta la fecha, desagregado por año. Solicito copia digital de cada contrato. Se me informe qué equipos en específico fueron adquiridos, el costo de cada uno, la empresa a la que se les compraron y/o arrendaron, y su función específica.*

Se precise en cuántos casos (carpetas de investigación) han sido utilizados estos equipos, y cuántos expedientes quedaron resueltos de manera satisfactoria gracias a estas herramientas. Todo desde el 2007 y hasta la fecha, desagregado por año.)" (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a la: OP, OM, AIC, PFM, CGSP, CENAPI, SCRPPA, SEIDO, SEIDF, SDHPDSC, SJA, FEPAD, VG, COPLADII y a la DGCS.

PGR/CT/ACDO/472/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva con fundamento en el artículo 110, fracciones I y V, y de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, de las cinco versiones públicas puestas disposición por la OM, hasta por un periodo de cinco años, en la información reservada. Por lo anterior, se mencionan las siguientes pruebas de daño:

Artículo 110, fracción I:

- I. Existe un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio del nexo que prevé la causal ahora analizada, ya que se trata de información que revelaría en su caso, datos relativos en materia de inteligencia, pues se refiere a los métodos, flujogramas y tácticas para la obtención y análisis de información como evidencias, peritajes, testimonios, declaraciones, audios y videos, encaminados al esclarecimiento de los

hechos delictivos, lo cual obstruiría las funciones de esta Procuraduría General de la República para combatir la delincuencia.

- II. Se supera el interés público general de conocer la información, toda vez que al divulgarla permitiría que las organizaciones criminales pudieran aprovecharla para vulnerar la capacidad de las investigaciones y combate frontal a la delincuencia organizada que lleva a cabo el sujeto obligado, puesto que dan cuenta de las especificaciones que se llevan a cabo sobre el almacenamiento, clasificación y administración de información de inteligencia de la Institución.
- III. El proteger la información se adecua al principio de proporcionalidad, en tanto que se justifica negar su divulgación por el riesgo de vulnerar y poner en peligro la capacidad y margen de operación de esta Procuraduría General de la República, dificultando las estrategias para la investigación y persecución de los delitos en contra de la delincuencia organizada.

Artículo 110, fracción V:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de esta Institución representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Asimismo, derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.
- III. Adicionalmente, atendiendo el principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de la Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.

De la misma manera, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva de los documentos localizados por la AIC, con fundamento en el artículo 110, fracciones I, V, VII y XIII; en relación con los artículos 3, fracción III, 4, 6, fracción II, 9, 12, fracción X, 29 al 31, 50, 51, 54 de la Ley de Seguridad Nacional, así como 3, 5, fracción IX, 7, fracciones II, III, VIII y XVI de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en correspondencia con el artículo 49 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 210 de su Reglamento, hasta por un periodo de cinco años. Por lo que se proporcionan las siguientes pruebas de daño:

Artículo 110, fracción I:

- I. Es un riesgo real, demostrable e identificable, el divulgar la documentación requerida, ya que obstaculizaría las estrategias y acciones para combatir a la delincuencia organizada y garantizar la Seguridad Pública y Nacional; toda vez que contiene información sensible, que contiene elementos que permiten establecer el procedimiento y especificaciones técnicas útiles utilizadas en las labores de inteligencia de esta Procuraduría General de la República, que potencializan una amenaza en caso de su revelación.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que con la entrega de la documentación peticionada, se obstaculiza el combate al crimen organizado, ya que en caso de que la información requerida cayera en manos de los integrantes de la delincuencia, tendrían a su disposición información de inteligencia y contrainteligencia generada para la investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada, que revela las estrategias y capacidades de esta Procuraduría General de la República, utilizadas exclusivamente en contra de los miembros de las organizaciones delictivas, y así verse afectada la Seguridad Pública y Nacional, traduciéndose en un interés particular sobre el interés público a cargo de esta Representación Social Federal.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el clasificar la información solicitada se traduce en la salvaguarda de un interés general, como lo es el resguardo de la Seguridad Pública y Nacional a través de la investigación y persecución de los delitos, encomienda del Ministerio Público de la Federación. Por lo que resulta de mayor relevancia para la sociedad que esta Procuraduría General de la República vele por la Seguridad Pública y Nacional a través del combate al crimen organizado por medio de actividades de inteligencia y contrainteligencia, del que se desprende información relativa a las técnicas y estrategias de investigación para el combate al crimen organizado.

Artículo 110, fracción V:

- I. Es un riesgo real, demostrable e identificable, ya que dar a conocer datos sobre las personas involucradas en los instrumentos contractuales de referencia, pone en riesgo su vida, seguridad y salud, incluso las de sus familiares, toda vez que con la publicidad de dichos datos se harían identificables y susceptibles de amenazas, extorsiones,

intimidaciones y atentados por miembros de la delincuencia, ya que al conocer y/o al haber conocido de información sensible de inteligencia y contrainteligencia utilizada en contra de la delincuencia organizada, los hace vulnerables de represalias y objetos del crimen para la revelación de datos de su interés.

- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que el divulgar datos de las personas que participaron en los procedimientos de contratación, pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares, toda vez que serían ser sujetos de amenazas y extorsiones por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la información de inteligencia y contrainteligencia para el resguardo de la Seguridad Nacional y Pública, o simplemente ser blanco de represalias ya que la información de que se trata, está relacionada con el combate a la delincuencia organizada, en este sentido, el proteger el derecho fundamental de la vida de los involucrados y la de sus familiares, supera el interés particular de conocer la documentación requerida.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar la información relacionada con los datos de las personas que intervinieron en los procesos de contratación, resulta el medio menos restrictivo, ya que las personas que tienen conocimiento de información de inteligencia y contrainteligencia en contra de la delincuencia, los coloca en una situación de riesgo, por lo que proteger su vida, seguridad y salud, así como las de sus familiares, es proporcional a la excepción del derecho de acceso a la información.

Artículo 110, fracción VII:

- I. Es un riesgo real, demostrable e identificable, ya que de entregar la documentación solicitada, se haría pública información que contiene especificaciones y modos de operación de los instrumentos utilizados por el Ministerio Público de la Federación en la investigación y persecución de delitos, a través de la integración de las averiguaciones previas y las carpetas de investigación en integración, datos que de caer en manos de los integrantes de los grupos criminales, serían utilizados para evadir, destruir u ocultar los medios de prueba recopilados para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o los responsable de la comisión de un ilícito.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que la investigación y persecución de los delitos en materia de delincuencia organizada por parte del Ministerio Público de la Federación, se ubica por encima de la entrega de la información requerida.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, la clasificación de reserva de la información solicitada es directamente proporcional al derecho de la reparación del daño de las víctimas de la delincuencia organizada, de su derecho a la verdad, de su derecho a la justicia, y de su derecho a la reparación del daño.

Artículo 110, fracción XIII:



- I. Es un riesgo real, demostrable e identificable, ya que con la entrega de la documentación solicitada se contraviene lo dispuesto en la normativa aplicable.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que con la entrega de la documentación requerida, y el contravenir de la normativa aplicable en donde se establece expresamente la reserva de la documentación solicitada, implica fincar responsabilidades administrativas o penales a servidores públicos que realicen acciones contrarias a las establecidas en la normativa correspondiente.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, la clasificación de la documentación solicitada, es directamente proporcional al estricto cumplimiento de lo establecido en la normativa que a continuación se precisa, toda vez que la contratación de referencia, se realizó en términos de lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los aplicables en las Leyes y Reglamentos correspondientes, correspondientes a Gastos de Seguridad Pública y Nacional. - - - -

A.2. Folio 0001700197317

Contenido de la Solicitud: "(...), por mi propio derecho...

... 1 Se me haga saber en forma inmediata la existencia de todas y cada una de las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que existan en contra de la suscrita o cualquier otra en la que esté involucrada o se pretenda relacionar.

2. ¿Cuáles son los números de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación en las que como se ha mencionado, se me pretende vincular con conductas penalmente reprochables, mediante la interposición de denuncias que al día de hoy han estado ocultas para la suscrita?

3. ¿Cuál es la razón y/o motivo por el cual hasta el día de hoy, se me han mantenido ocultas dichas indagatorias, no siendo citada por esta representación Social para enterarme de las imputaciones que han sido formuladas en mi contra, así como para rendir mi entrevista de ley, en irrestricto respeto a los Derechos de Defensa que la propia Constitución me otorga?

4. Con motivo de la secrecía y la flagrante violación a los principio de contradicción y de igualdad ante la ley del nuevo Procedimiento penal Acusatorio y Oral en mi perjuicio. Porque razón la Procuraduría General de la Republica, continua trabajando mediante "practicas" del ya superado Sistema Inquisitivo, cuando la Constitución establece que sus actuaciones deben regirse por los Principios de la Universalidad, Independencia, Indivisibilidad y Progresividad?..." (Sic.)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, SCRPPA, OP, SEIDF, VG, FEPADE, SDHPDSC, SEIDO y SJAI.

PGR/CT/ACDO/473/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la reserva del pronunciamiento Institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia o inexistencia de la información requerida, con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP.

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se

A.3. Folio 0001700200417

Contenido de la Solicitud: *"Solicito la versión pública de las averiguaciones previas abiertas por el delito de pornografía infantil en internet o medios electrónicos, a nivel nacional del 1 de enero del 2008 al 30 de junio del 2017" (Sic.)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: SCRPPA, COPLADII, SEIDF, SDHPDSC y SEIDO.

PGR/CT/ACDO/474/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva manifestada por la SDHPDSC, sobre las averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas, lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP. Por lo que, se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. Con la entrega de la documentación solicitada se hace pública la información que se recopila en un expediente de averiguación previa y/o carpeta de investigación abierta, es decir: que continua en investigación, por lo que las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación y por la Policía Federal Ministerial bajo su mando, hasta en tanto se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o de los indiciados, se estaría afectando el interés general que tutela esta Procuraduría General de la República.
- II. Al hacerse públicos los elementos que el Agente del Ministerio Público de la Federación y la Policía Federal Ministerial pondrían a consideración del Juez, para determinar la culpabilidad o no del o de los probables responsables, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito, o incluso, sustraerse de la acción de la justicia.

Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta esta Institución es la de garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a una persona, con lo que prevalecería el interés particular sobre el interés general. En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial de investigación y persecución de los delitos, en este caso cometidos contra niños y niñas, como es el Delito de Pornografía Infantil, reconociendo el carácter público de la protección de los intereses de la infancia, desde 1990, cuando México suscribió la Convención Sobre los Derechos de la Niñez (CDN), instrumento que adquiere el mayor número de países adherentes en la Historia de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Niñez, a partir de la cual se han desarrollado diversos



instrumentos internacionales que tutelan derechos específicos de la infancia, como son los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos de la Niñez relativo a la prostitución y utilización de niñas y niños en la pornografía.

- III. El reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la información pública, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Público, únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social. -----

[illegible]

A.4. Folio 0001700200617

Contenido de la Solicitud: *"Deseo saber si tengo alguna denuncia, con motivo de mi desempeño como Consejero Electoral Local (Suplente: procesos electorales federales 2011-2012 y 2014-2015) Local Propietario (Proceso Electoral Local en el Estado de Puebla 2015-2016)." (Sic)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, FEPADE, SCRPPA y SEIDF.

PGR/CT/ACDO/475/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la reserva del pronunciamiento Institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia o inexistencia de la información requerida, con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP.

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información petitionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la

materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.


En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo respecto a la información petitionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los

[illegible]

A.5. Folio 0001700201017

Contenido de la Solicitud: *"Quiero saber cuántos de los denominados objetivos prioritarios capturados por el gobierno mexicano han sido entregados a otro país tras la respectiva solicitud de extradición. 1.-Es decir, cuántos han sido extraditados. 2.-Quienes han sido extraditados. 3.- A qué país se extraditaron. 4.- En qué fecha se concedió la extradición, 5.- Cuántos han sido solicitados en extradición y aún no se autoriza." (Sic)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, PFM, CAIA, CENAPI, SCRPPA y SEIDO.

PGR/CT/ACDO/476/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo o negativo, respecto de aquellas personas que su situación jurídica no se relaciona con averiguaciones previas, carpeta de investigación, acta circunstanciada o cualquier línea de investigación, en materia de delincuencia organizada, y en las cuales se cuente con una sentencia condenatoria irrevocable en materia de delincuencia organizada, ello con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Toda vez que, emitir pronunciamiento alguno sobre personas relacionadas con una averiguación previa en trámite, en reserva o que no se ejerció la acción penal, o bien, ejercida la acción penal el proceso se encuentre pendiente de resolver y no se haya emitido una sentencia irrevocable en materia de delincuencia organizada, o en su caso, resuelto se haya emitido una sentencia revocable, o bien, resuelto se cuente con una sentencia absolutoria irrevocable, permitiría vincular a las personas en comento con alguna investigación instaurada en su contra y que se encuentre a cargo de esta Institución Federal, y en consecuencia afectaría su intimidad, prestigio y buen nombre, máxime que de la búsqueda realizada por la Dirección General de Comunicación Social, no encontró boletines, comunicados de prensa, ni informes oficiales de esta Procuraduría, en donde se precisara la información requerida.

De esta forma, se precisa que la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. *Se considera información confidencial:*

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los "Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información así como la elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales)", se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;*
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y*
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.*

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Procuraduría, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando participe como parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos

personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Refuerza lo anterior, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. *El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.*

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Pleno

Tomo: XI, Abril de 2000

Tesis: P. LX/2000

Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. *El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones*

o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos señala:

ARTÍCULO 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece:

ARTÍCULO 17.

- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código".

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.

A.6. Folio 0001700206917

Contenido de la Solicitud: *"Solicito conocer los datos de todas las averiguaciones previas o carpetas de investigación en las que se encuentre involucrado o sea presunto responsable, el C. (...), Gobernador del Estado de (...), desde el año 2008 a la fecha. La información deberá corresponder a averiguaciones en curso, concluidas o consignadas y en su caso deberá contener: número de expediente, averiguación o carpeta, delitos por los que se investiga, fecha de inicio de la averiguación, estado que guarda la averiguación, agente del Ministerio Público o Instancia investigadora que lleva los expedientes. También en los casos de averiguaciones o expedientes en las que no se haya ejercitado la acción penal o consignación ante juzgados, que hayan sido cerrados o concluidos."* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, SEIDF, SCRPPA, SEIDO, FEPADE y SDHPDSC.

PGR/CT/ACDO/477/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional sobre la existencia o inexistencia de la información solicitada, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Toda vez que aseverar la existencia o inexistencia de investigaciones sobre una persona física y/o moral que sea identificada o identificable, se encuentra directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

Aunado a lo anterior, el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

**"CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO**

Artículo 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable".

Como refuerzo de lo anterior, es loable traer a colación lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona

a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

"Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)
Décima Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tribunales Colegiados de Circuito
160425 1 de 3
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pág. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos".

"Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público".

"Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados".

Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé:

"Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques."

Sobre el mismo tema, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se señala:

"Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad.

- 1.- Toda persona tiene derecho a l respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.*
- 2.- Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.*
- 3.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques".*

Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, establece:

"Artículo 17.

- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.*
- 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques."*

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dispone:

"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

- 1. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa".*

Concatenado a esto, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra establece:

"Artículo 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código".

A.7. Folio 0001700208717

Contenido de la Solicitud: *"Copia en versión electrónica de la caracterización del sitio afectado por el accidente ocurrido poblado Huimango del municipio de Cunduacán, Tabasco en el mes de julio del año 2005 relacionado con la explosión de un gasoducto de PEMEX."* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, SCRPPA, SEIDF y CGSP.


PGR/CT/ACDO/478/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva de la información solicitada, toda vez que se encuentra dentro de una averiguación previa en estatus de reserva, con fundamento en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP. Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. Con la entrega de la documentación solicitada se hace pública la información que se recopila en un expediente de averiguación previa y/o carpeta de investigación que continua en investigación; es decir, las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación y por la Policía Federal Ministerial bajo su mando, hasta en tanto se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o de los inculcados, con ello se estaría afectando el interés general que tutela esta Procuraduría General de la República.
- II. Al hacerse públicos los elementos que el Agente del Ministerio Público de la Federación y la Policía Federal Ministerial pondrían a consideración del Juez, para determinar la culpabilidad o no del o de los probables responsables, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito, o incluso, sustraerse de la acción de la justicia.

Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a una persona, con lo que prevalecería el interés particular sobre el interés general.

- III. El reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la información pública, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for consistent letter formation. There is no text or other markings on the paper.



A.8. Folio 0001700208817

Contenido de la Solicitud: *"Copia en versión electrónica del peritaje realizado al accidente ocurrido poblado Huimango del municipio de Cunduacán, Tabasco en el mes de julio del año 2005 relacionado con la explosión de un gasoducto de PEMEX."* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, SCRPPA, SEIDF y CGSP.


PGR/CT/ACDO/479/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva del peritaje en comento, toda vez que se encuentra dentro de una averiguación previa en estatus de reserva, con fundamento en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP. Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. Con la entrega de la documentación solicitada se hace pública la información que se recopila en un expediente de averiguación previa y/o carpeta de investigación que continua en investigación; es decir, las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación y por la Policía Federal Ministerial bajo su mando, hasta en tanto se acredite el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del o de los indiciados, con ello se estaría afectando el interés general que tutela esta Procuraduría General de la República.
- II. Al hacerse públicos los elementos que el Agente del Ministerio Público de la Federación y la Policía Federal Ministerial pondrían a consideración del Juez, para determinar la culpabilidad o no del o de los probables responsables, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito, o incluso, sustraerse de la acción de la justicia.

Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a una persona, con lo que prevalecería el interés particular sobre el interés general.

- III. El reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la información pública, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features approximately 20 horizontal rows. Each row is defined by two parallel dashed lines, creating a series of uniform gaps for letter height. The lines are evenly spaced across the entire page, providing a guide for consistent letter formation. There is no text or other markings on the paper.



A.9. Folio 0001700210417

Contenido de la Solicitud: "(...),

1. *Si existe o no alguna carpeta de investigación o investigación penal en mi contra o en la que se me señale como persona sujeta a investigación, posible autor, posible participe, indiciado, imputado o acusado en la comisión de algún hecho que la ley señala como delito.*
2. *De no existir alguna carpeta de investigación o investigación penal en mi contra en donde se me señale como persona sujeta a investigación, posible autor, posible participe, indiciado imputado o acusado en la comisión de algún hecho que la ley señala como delito;*
3. *De existir alguna carpeta de investigación o investigación penal en mi contra o en la que se me señale como persona sujeta a investigación, sujeta a investigación, posible autor, posible participe, indiciado, imputado, o acusado en la comisión de algún hecho que la ley señala como delito, ordene a quien corresponda envíe de inmediato citatorio al domicilio que indico en este escrito.*

Si se configura lo anterior, solicito que en el citatorio se indiquen los delitos que hagan viable mi comparecencia, motivo de la misma, calidad jurídica con la que cuento, numero de carpeta de investigación, día, lugar y hora en la que deba comparecer y en general, que contenga, todos los elementos necesarios para proteger mis derechos humanos y se dé al suscrito y a mis defensores particulares inmediato acceso a las constancias de la carpeta de investigación, en términos de lo que disponen el artículo 109 fracción XXII. Así como el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales". (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS, SEIDO, OP, SCRPPA, SEIDF, CAIA, SJA, CAIA, VG, FEPADE y SDHPDSC.

PGR/CT/ACDO/480/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la reserva del pronunciamiento Institucional en sentido afirmativo o negativo sobre la existencia o inexistencia de la información requerida, con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP.

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, toda vez que al aseverar la existencia de un procedimiento penal en contra de una persona identificada o identificable, se estaría alertando al probable responsable o a sus cómplices, y con ello, podrían sustraerse de la acción de la justicia, o alterar y destruir los medios de prueba que en su caso estuviere recabando el Ministerio Público de la Federación.

Ahora bien, el negar la existencia o inexistencia de dichos procedimientos, se traduce en que el Ministerio Público de la Federación no lleva a cabo investigaciones por hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de determinada persona, y con ello, se podría continuar con la realización de dichas conductas delictivas con la certeza de que no existe o existió investigación ministerial en su contra.

- II. El riesgo de perjuicio que supone la divulgación de la información supera el interés público general, ya que todas las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público, representado en la procuración de justicia a favor de la sociedad, interés que se vería en detrimento a fin de salvaguardar un interés particular.
- III. La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría General de la República sobre la existencia o inexistencia de la información peticionada, no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información, ni del debido proceso, en razón de la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, ya que en caso de existir alguna investigación en contra de una persona, la Ley en la materia, salvaguarda el derecho de los imputados para su debida defensa y debido proceso.

En ese sentido, si bien toda la información en posesión de las autoridades federales, estatales y municipales, es pública y susceptible de acceso por los particulares; el derecho de acceso a la información se encuentra sujeto a limitaciones por razones de interés público previstas en la normativa correspondiente, es decir, el régimen de excepciones a la publicidad de la información obedece a un criterio de ponderación. En el caso concreto, se actualiza una razón de excepcionalidad, toda vez que existe un riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos.

La reserva del pronunciamiento de esta Procuraduría en sentido afirmativo o negativo respecto a la información peticionada, no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la prevención de los delitos como facultad de esta Institución, consistente en la implementación de acciones para evitar su comisión; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular en torno al cual, las numerosas y diversas pretensiones y aspiraciones que son tuteladas por el derecho pueden clasificarse en dos grandes grupos, en el primero, se incluyen las pretensiones que tienden a satisfacer las necesidades específicas de los individuos y grupos sociales; dichas pretensiones constituyen el interés privado, y tienen las características de que, al ser satisfechas, se producen beneficios solamente para determinadas personas.

Por el contrario, en el segundo grupo se encuentran las pretensiones que son compartidas por la sociedad en su conjunto, y cuya satisfacción origina beneficios para todos los integrantes de una colectividad. Estas últimas pretensiones son garantizadas

mediante la actividad constante de los órganos del Estado, y para referirse a ellas se utiliza la expresión interés público. Por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.

De esta suerte, el interés público es protegido por el Estado no sólo mediante disposiciones legislativas, sino también a través de un gran número de medidas de carácter administrativo que integran una actividad permanente de los poderes públicos, dirigida a satisfacer las necesidades colectivas. En cambio, en relación al interés privado, el Estado se limita a crear las condiciones propias para que los particulares satisfagan sus pretensiones mediante su propio esfuerzo. Así, se colige que el interés público es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado.

En este tenor, se garantiza el acceso a la información en posesión de los sujetos obligados con determinadas limitaciones, atendiendo a razones de interés público. No obstante, estas limitaciones se deben interpretar de forma restrictiva, con el fin de que únicamente se niegue la información cuando exista un riesgo de daño sustancial a los intereses jurídicamente protegidos, que sea mayor al interés general de tener acceso a lo solicitado; por lo que, para la negativa de la información, es necesario que se demuestre en forma clara y debidamente sustentada el mérito de la reserva o confidencialidad de ésta. -----

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

Lo anterior, con sustento en lo establecido en las siguientes tesis jurisprudenciales:

*Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)
Décima Época
Semana Judicial de la Federación y su Gaceta
Tribunales Colegiados de Circuito
160425 1 de 3
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

*Tesis Aislada
Novena Época
Semana Judicial de la Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309*

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en



otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada
Novena Época
Semana Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

En ese sentido, se desprende que todo individuo, al vivir en sociedad tiene el derecho de ser respetado y considerado, por lo cual, en el ámbito jurídico, ésta necesidad se traduce en un derecho que tiene cada uno a pedir que se le trate de forma decorosa; de lo contrario, el honor de cada individuo puede ser lesionado por todo aquello que afecte su reputación. -----

A.11. Folio 1700100026517 – Agencia de Investigación Criminal

Contenido de la Solicitud: *"1. Cuándo se implemento el uso de binomios caninos en la policía a su cargo, describa la historia de la Unidad Canina.*

2. Cuándo se implemento el uso de binomios caninos detectores de restos humanos en la Unidad Canina.

3. Cuántos binomios caninos detectores de restos humanos a tenido la Unidad Canina durante el período 2006 - 2016, y cuántos binomios tienen a la fecha?

4. Cuántos operativos han realizado los binomios caninos detectores de restos humanos durante el período 2006-2016 por entidad federativa?

5. Número de ocasiones que estos operativos han tenido éxito.

6. Número de restos humanos y/o personas localizadas por el binomio canino detector de restos humanos durante el período 2006-2016 por entidad federativa." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: AIC.

PGR/CT/ACDO/482/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva respecto del punto 3 de la solicitud, con fundamento en el artículo 110, fracción I de la LFTAIP, por un período de cinco años. Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. La revelación de la información requerida constituiría la base para la identificación de los caninos así como de sus entrenadores los cuales se encuentran adscritos a la Policía Federal Ministerial, con lo cual se aumentaría exponencialmente el riesgo a su vida y seguridad personal, así como la de sus familiares ya que se vuelven susceptibles de ser privados de su libertad, sufrir algún atentado, daño a su patrimonio o afectación de cualquier índole, provocando inestabilidad emocional familiar ante la posibilidad de un evento violento.
- II. Hacer públicos los detalles de la información solicitada, origina interés a las organizaciones criminales, tanto nacionales como internacionales, causando daño institucional y de seguridad nacional, toda vez que restaría eficiencia al sistema de investigación y persecución de delitos federales y dicha revelación promovería oportunidades para obstaculizar el desempeño operativo del personal adscrito a la Policía Federal Ministerial, por aquellos interesados en mermar la integridad del sistema.

- III. La revelación de la información causaría un quebranto a las estructuras organizacionales de la Procuraduría General de la República, propiciando un posible estado de indefensión generando un riesgo inminente a la integridad física de los elementos pudiendo ser secuestrados y coaccionados para obtener información que ponga en riesgo los protocolos de actuación policial, las instalaciones oficiales, y al obtenerla dificultar las estrategias para combatir las acciones delictivas de las organizaciones criminales, restando eficiencia al sistema de investigación y persecución de delitos federales .

A.12. Folio 1700100027917 – Agencia de Investigación Criminal

Contenido de la Solicitud: "1. ¿Cuándo se implementó el uso de binomios caninos en la policía a su cargo, podría compartir la historia de la Unidad Canina?

2. ¿Cuándo se implementó el uso de binomios caninos detectores de restos humanos en la Unidad Canina?

3. ¿Cuántos binomios detectores de restos humanos ha tenido la Unidad Canina durante el periodo 2006-2016 y cuántos binomios tiene a la fecha?

4. ¿Cuántos operativos han realizado los binomios caninos detectores de restos humanos durante el periodo 2006-2016 por entidad federativa?

5. Número de ocasiones que estos operativos han tenido éxito, durante el periodo 2006-2016 por entidad federativa.

6. Número de restos humanos y/o personas localizadas por el binomio canino detector de restos humanos durante el periodo 2006-2016 por entidad federativa." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: AIC.

PGR/CT/ACDO/483/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva respecto del punto 3 de la solicitud, con fundamento en el artículo 110, fracción I de la LFTAIP, por un periodo de cinco años. Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. La revelación de la información requerida constituiría la base para la identificación de los caninos así como de sus entrenadores los cuales se encuentran adscritos a la Policía Federal Ministerial, con lo cual se aumentaría exponencialmente el riesgo a su vida y seguridad personal, así como la de sus familiares ya que se vuelven susceptibles de ser privados de su libertad, sufrir algún atentado, daño a su patrimonio o afectación de cualquier índole, provocando inestabilidad emocional familiar ante la posibilidad de un evento violento.
- II. Hacer públicos los detalles de la información solicitada, origina interés a las organizaciones criminales, tanto nacionales como internacionales, causando daño institucional y de seguridad nacional, toda vez que restaría eficiencia al sistema de investigación y persecución de delitos federales y dicha relevación promovería oportunidades para obstaculizar el desempeño operativo del personal adscrito a la Policía Federal Ministerial, por aquellos interesados en mermar la integridad del sistema.



- III. La revelación de la información causaría un quebranto a las estructuras organizacionales de la Procuraduría General de la República, propiciando un posible estado de indefensión generando un riesgo inminente a la integridad física de los elementos pudiendo ser secuestrados y coaccionados para obtener información que ponga en riesgo los protocolos de actuación policial, las instalaciones oficiales, y al obtenerla dificultar las estrategias para combatir las acciones delictivas de las organizaciones criminales, restando eficiencia al sistema de investigación y persecución de delitos federales . - - - - -

1. *Introduction*
 2. *Background*
 3. *Methodology*
 4. *Results*
 5. *Discussion*
 6. *Conclusion*
 7. *References*
 8. *Appendix*
 9. *Index*
 10. *Glossary*
 11. *Abbreviations*
 12. *Acronyms*
 13. *Footnotes*
 14. *Endnotes*
 15. *Supplementary Materials*
 16. *Tables*
 17. *Figures*
 18. *Equations*
 19. *Formulas*
 20. *Diagrams*
 21. *Flowcharts*
 22. *Tables*
 23. *Figures*
 24. *Equations*
 25. *Formulas*
 26. *Diagrams*
 27. *Flowcharts*
 28. *Tables*
 29. *Figures*
 30. *Equations*
 31. *Formulas*
 32. *Diagrams*
 33. *Flowcharts*
 34. *Tables*
 35. *Figures*
 36. *Equations*
 37. *Formulas*
 38. *Diagrams*
 39. *Flowcharts*
 40. *Tables*
 41. *Figures*
 42. *Equations*
 43. *Formulas*
 44. *Diagrams*
 45. *Flowcharts*
 46. *Tables*
 47. *Figures*
 48. *Equations*
 49. *Formulas*
 50. *Diagrams*
 51. *Flowcharts*
 52. *Tables*
 53. *Figures*
 54. *Equations*
 55. *Formulas*
 56. *Diagrams*
 57. *Flowcharts*
 58. *Tables*
 59. *Figures*
 60. *Equations*
 61. *Formulas*
 62. *Diagrams*
 63. *Flowcharts*
 64. *Tables*
 65. *Figures*
 66. *Equations*
 67. *Formulas*
 68. *Diagrams*
 69. *Flowcharts*
 70. *Tables*
 71. *Figures*
 72. *Equations*
 73. *Formulas*
 74. *Diagrams*
 75. *Flowcharts*
 76. *Tables*
 77. *Figures*
 78. *Equations*
 79. *Formulas*
 80. *Diagrams*
 81. *Flowcharts*
 82. *Tables*
 83. *Figures*
 84. *Equations*
 85. *Formulas*
 86. *Diagrams*
 87. *Flowcharts*
 88. *Tables*
 89. *Figures*
 90. *Equations*
 91. *Formulas*
 92. *Diagrams*
 93. *Flowcharts*
 94. *Tables*
 95. *Figures*
 96. *Equations*
 97. *Formulas*
 98. *Diagrams*
 99. *Flowcharts*
 100. *Tables*
 101. *Figures*
 102. *Equations*
 103. *Formulas*
 104. *Diagrams*
 105. *Flowcharts*
 106. *Tables*
 107. *Figures*
 108. *Equations*
 109. *Formulas*
 110. *Diagrams*
 111. *Flowcharts*
 112. *Tables*
 113. *Figures*
 114. *Equations*
 115. *Formulas*
 116. *Diagrams*
 117. *Flowcharts*
 118. *Tables*
 119. *Figures*
 120. *Equations*
 121. *Formulas*
 122. *Diagrams*
 123. *Flowcharts*
 124. *Tables*
 125. *Figures*
 126. *Equations*
 127. *Formulas*
 128. *Diagrams*
 129. *Flowcharts*
 130. *Tables*
 131. *Figures*
 132. *Equations*
 133. *Formulas*
 134. *Diagrams*
 135. *Flowcharts*
 136. *Tables*
 137. *Figures*
 138. *Equations*
 139. *Formulas*
 140. *Diagrams*
 141. *Flowcharts*
 142. *Tables*
 143. *Figures*
 144. *Equations*
 145. *Formulas*
 146. *Diagrams*
 147. *Flowcharts*
 148. *Tables*
 149. *Figures*
 150. *Equations*
 151. *Formulas*
 152. *Diagrams*
 153. *Flowcharts*
 154. *Tables*
 155. *Figures*
 156. *Equations*
 157. *Formulas*
 158. *Diagrams*
 159. *Flowcharts*
 160. *Tables*
 161. *Figures*
 162. *Equations*
 163. *Formulas*
 164. *Diagrams*
 165. *Flowcharts*
 166. *Tables*
 167. *Figures*
 168. *Equations*
 169. *Formulas*
 170. *Diagrams*
 171. *Flowcharts*
 172. *Tables*
 173. *Figures*
 174. *Equations*
 175. *Formulas*
 176. *Diagrams*
 177. *Flowcharts*
 178. *Tables*
 179. *Figures*
 180. *Equations*
 181. *Formulas*
 182. *Diagrams*
 183. *Flowcharts*
 184. *Tables*
 185. *Figures*
 186. *Equations*
 187. *Formulas*
 188. *Diagrams*
 189. *Flowcharts*
 190. *Tables*
 191. *Figures*
 192. *Equations*
 193. *Formulas*
 194. *Diagrams*
 195. *Flowcharts*
 196. *Tables*
 197. *Figures*
 198. *Equations*
 199. *Formulas*
 200. *Diagrams*
 201. *Flowcharts*
 202. *Tables*
 203. *Figures*
 204. *Equations*
 205. *Formulas*
 206. *Diagrams*
 207. *Flowcharts*
 208. *Tables*
 209. *Figures*
 210. *Equations*
 211. *Formulas*
 212. *Diagrams*
 213. *Flowcharts*
 214. *Tables*
 215. *Figures*
 216. *Equations*
 217. *Formulas*
 218. *Diagrams*
 219. *Flowcharts*
 220. *Tables*
 221. *Figures*
 222. *Equations*
 223. *Formulas*
 224. *Diagrams*
 225. *Flowcharts*
 226. *Tables*
 227. *Figures*
 228. *Equations*
 229. *Formulas*
 230. *Diagrams*
 231. *Flowcharts*
 232. *Tables*
 233. *Figures*
 234. *Equations*
 235. *Formulas*
 236. *Diagrams*
 237. *Flowcharts*
 238. *Tables*
 239. *Figures*
 240. *Equations*
 241. *Formulas*
 242. *Diagrams*
 243. *Flowcharts*
 244. *Tables*
 245. *Figures*
 246. *Equations*
 247. *Formulas*
 248. *Diagrams*
 249. *Flowcharts*
 250. *Tables</*



A.13. Folio 1700100028417 – Agencia de Investigación Criminal

Contenido de la Solicitud: *“¿Con cuántos Analistas de Información Criminal, cuenta la dependencia para realizar el análisis de información derivada de la comisión de hechos delictuosos?” (Sic)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: AIC.

PGR/CT/ACDO/484/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva de la información requerida, por un periodo de cinco años; lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 110, fracción I de la LFTAIP. Por lo que se proporcionan la siguiente prueba de daño:

- I. El hacer del dominio público la estructura de este Centro, implica revelar su estado de fuerza al proporcionar el número y categoría de los servidores públicos que laboran en él, en consecuencia al realizar una analogía de dicha información por parte de miembros de la delincuencia organizada, este Órgano Desconcentrado está expuesto a verse superado en número, situación que propicia que se bloqueen las actividades de inteligencia y contrainteligencia tendientes a preservar la seguridad nacional; de lo antes expuesto se advierte un riesgo real, toda vez que divulgar datos como la categoría, especialidad y número de profesionistas conlleva a la revelación de fuentes y especificaciones técnicas de sus funciones, información que de llegar al poder las organizaciones delictivas facilita que puedan evadirse de la acción de la justicia, en virtud de que este Centro en el ejercicio de sus funciones no sólo coadyuva con el Agente del Ministerio Público Federal en el intercambio de información de carácter sensible, igualmente establece los mecanismos y sistemas de intercambio de información entre Organismos Internacionales. Aunado a lo anterior, es menester señalar que el CENAPI es parte de la Procuraduría General de la República y al ser el C. Procurador integrante del Consejo de Seguridad Nacional, se permite la clasificación y custodia de la información que sea considerada parte de la Seguridad Nacional, en este tenor y en atención a lo manifestado en líneas anteriores así como a las atribuciones propias de este Centro contempladas en los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en las que se advierte que el personal adscrito se allega de información de carácter sensible, se concluye que la revelación de cualquier tipo de información relativa a su estructura orgánica y a su personal es de carácter reservado.
- II. En virtud de las actuales condiciones que operan en el país, hacer del conocimiento público dicha información atentaría directamente en las labores implementadas para el combate a la delincuencia organizada, poniendo en peligro la actividad de inteligencia criminal que conforma el sector de Seguridad Nacional, en virtud de que conocer los datos del personal a cierto nivel de desglose, implica no sólo revelar la

capacidad de reacción de este Centro, sino un claro perjuicio a la procuración de justicia a favor de la sociedad, de lo anterior puede concluirse que el permitir que los datos personales de los servidores públicos se encuentren al alcance de cualquier individuo, involucra no sólo un riesgo en su integridad, sino una afectación directa en el curso de las investigaciones desprendidas de averiguaciones previas o carpetas de investigación, ya que como se ha manifestado en líneas anteriores, este Centro coadyuva con el Agente del Ministerio Público de la Federación en materia de intercambio de información, sumando a lo antes referido la realización de estudios criminógenos y geodelictivos que permiten la planeación integral del combate a la delincuencia.

- III. El difundir cualquier dato relacionado con el personal activo, vulnera el estado de fuerza de este Órgano Desconcentrado al dejar ver su capacidad de reacción, máxime que implica la revelación del cargo y por ende de la funciones del mismo, precisando que dichas funciones se encuentran tendientes a coadyuvar en la investigación y análisis del fenómeno de la delincuencia; motivo por el cual difundir la información en comento implica una vulneración a la Seguridad Nacional y a los derechos de la ciudadanía en materia de seguridad pública, en razón de lo anterior la reserva de la información requerida no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la Seguridad Nacional y en las acciones tendientes a su preservación; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular, por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.-----

A.14. Folio 1700100028517 – Agencia de Investigación Criminal

Contenido de la Solicitud: *"Cuántos Analistas de Información Criminal, han colaborado en la integración de las carpetas de investigación, derivadas del Nuevo Sistema de Justicia Penal?" (Sic)*

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: AIC.

PGR/CT/ACDO/485/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de reserva de la información requerida, por un periodo de cinco años; lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 110, fracción I de la LFTAIP. Por lo que se proporcionan la siguiente prueba de daño:

- I. El hacer del dominio público la estructura de este Centro, implica revelar su estado de fuerza al proporcionar el número y categoría de los servidores públicos que laboran en él, en consecuencia al realizar una analogía de dicha información por parte de miembros de la delincuencia organizada, este Órgano Desconcentrado está expuesto a verse superado en número, situación que propicia que se bloqueen las actividades de inteligencia y contrainteligencia tendientes a preservar la seguridad nacional; de lo antes expuesto se advierte un riesgo real, toda vez que divulgar datos como la categoría, especialidad y número de profesionistas conlleva a la revelación de fuentes y especificaciones técnicas de sus funciones, información que de llegar al poder las organizaciones delictivas facilita que puedan evadirse de la acción de la justicia, en virtud de que este Centro en el ejercicio de sus funciones no sólo coadyuva con el Agente del Ministerio Público Federal en el intercambio de información de carácter sensible, igualmente establece los mecanismos y sistemas de intercambio de información entre Organismos Internacionales. Aunado a lo anterior, es menester señalar que el CENAPI es parte de la Procuraduría General de la República y al ser el C. Procurador integrante del Consejo de Seguridad Nacional, se permite la clasificación y custodia de la información que sea considerada parte de la Seguridad Nacional, en este tenor y en atención a lo manifestado en líneas anteriores así como a las atribuciones propias de este Centro contempladas en los artículos 93 y 94 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en las que se advierte que el personal adscrito se allega de información de carácter sensible, se concluye que la revelación de cualquier tipo de información relativa a su estructura orgánica y a su personal es de carácter reservado.
- II. En virtud de las actuales condiciones que operan en el país, hacer del conocimiento público dicha información atentaría directamente en las labores implementadas para el combate a la delincuencia organizada, poniendo en peligro la actividad de inteligencia criminal que conforma el sector de Seguridad Nacional, en virtud de que conocer los datos del personal a cierto nivel de desglose , implica no sólo revelar la

capacidad de reacción de este Centro, sino un claro perjuicio a la procuración de justicia a favor de la sociedad, de lo anterior puede concluirse que el permitir que los datos personales de los servidores públicos se encuentren al alcance de cualquier individuo, involucra no sólo un riesgo en su integridad, sino una afectación directa en el curso de las investigaciones desprendidas de averiguaciones previas o carpetas de investigación, ya que como se ha manifestado en líneas anteriores, este Centro coadyuva con el Agente del Ministerio Público de la Federación en materia de intercambio de información, sumando a lo antes referido la realización de estudios criminógenos y geodelictivos que permiten la planeación integral del combate a la delincuencia.

- III. El difundir cualquier dato relacionado con el personal activo, vulnera el estado de fuerza de este Órgano Desconcentrado al dejar ver su capacidad de reacción, máxime que implica la revelación del cargo y por ende de la funciones del mismo, precisando que dichas funciones se encuentran tendientes a coadyuvar en la investigación y análisis del fenómeno de la delincuencia; motivo por el cual difundir la información en comento implica una vulneración a la Seguridad Nacional y a los derechos de la ciudadanía en materia de seguridad pública, en razón de lo anterior la reserva de la información requerida no puede traducirse en un medio restrictivo a su derecho de acceso a la información, en razón que de la naturaleza de dicha información resulta proporcional al atender la importancia del interés jurídico tutelado en la causal de clasificación antes invocada, consistente en la Seguridad Nacional y en las acciones tendentes a su preservación; en ese sentido, en un ejercicio de ponderación de derechos cabe señalar que el interés general se coloca por encima de un interés particular, por ello, la protección otorgada al interés público tiene mayor alcance jurídico que la tutela concedida a los intereses privados.-----

B. Solicitudes de acceso a la información que se analiza la versión pública de los documentos requeridos.

B.1. Folio 0001700187417

Contenido de la Solicitud: "... Se expidan informe en copias certificada del reporte digital que se obtiene de la base de datos del 2014 y 2015 con la protesta de decir verdad de la persona que se encarga de dar la información a esta Unidad de Transparencia de la DGSJ sobre el reporte del Sistema de Control de Accesos con lectoras de los torniquetes de la DGSJ el Inmueble López No. 12 planta Baja Centro Histórico para acceder a la Fiscalía Especializada en atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión FEADLE ubicada en la Calle de López No. 12 en el Centro Histórico de la Ciudad de México del ingreso y salida de ex servidor público ANGEL CLAUDE ARROYO ORTIZ RFC AOOA 940729 SKO con huella digital y credencial de empleado de los siguientes días y año que se indican:

AÑO 2014:

23 de septiembre, 22, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 de octubre y 13 de noviembre del 2014

AÑO 2015:

27, 28 y 29 de enero, 16 de febrero, 24 y 25 de marzo, 15 de abril, 19, 26 y 29 de junio del 2015 en los mismos torniquetes.

Y en el caso de no tener el registro informe de que otra manera se registró la asistencia en la entrada y salida en las fechas señaladas." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM y SEIDF.

PGR/CT/ACDO/486/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la entrega de la versión pública de las documentales solicitadas, testando datos de personal sustantivo que aparezcan en ellas; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP. Por lo que, se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. Que el divulgar información perteneciente a personal sustantivo de esta Institución representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Que derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un



riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.

- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de la Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales. -----

B.2. Folio 0001700187517

Contenido de la Solicitud: *"Que se remita un informe con la protesta de decir verdad de la persona que se encarga de dar la información a esta Unidad de Transparencia de la FEADLE. Se solicita que remitan informe y relacione en copia certificada de las notificaciones con nombre, firma y fecha de puño y letra que le fueron enviadas para conocimiento de descuento por retardos de las fechas que abajo se listan, conforme al artículo 10 de los lineamientos del manual de prestaciones de Personal de la PGR que se giró y de qué manera al ex empleado Angel Claude Arroyo Ortiz con RFC AOOA 940729 SKO con el fin de no dejarlo en estado de indefensión y respetar su derecho de audiencia informándole de que no justificar su omisión o retardo en su entrada de labores o a la hora de comida le serían descontado el día completo como faltas o Inasistencia aunque él hubiera trabajado todo el día cuando el ex servidor público estuvo laborando en la FISCALIA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ubicada en la calle de López 12 segundo piso en el Centro Histórico de la Ciudad de México entre 204 y 2015.*

AÑO 2014:

23 de septiembre del 2014,
22, 23, 24, 28, 30 y 31 de Octubre del 2014
13 de noviembre del 2014

Año 2015:

27, 28 y 29 de enero del 2015
16 de febrero del 2015
24 y 25 de marzo del 2015
15 de abril del 2015
19, 26 y 29 de junio de 15." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM y SEIDF.

PGR/CT/ACDO/487/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la entrega de la versión pública de las documentales solicitadas, testando datos de personal sustantivo que aparezcan en ellas; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP. Por lo que, se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. Que el divulgar información perteneciente a personal sustantivo de esta Institución representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.

- II. Que derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de la Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales. -----

B.3. Folio 0001700187617

Contenido de la Solicitud: *"Se expida informe en copia certificada la jornada laboral y el reporte del kardex 2014 y 2015 con la protesta de decir verdad de la persona que se encarga de dar la información a esta Unidad de Transparencia de la FEADLE que informe si el ex servidor público ANGEL CLAUDE ARROYO ORTIZ con RFC AOOA 940729 SKO, asistió a laborar los días que abajo se indican y cuantas horas permaneció dentro del edificio con respecto a sus registro de asistencia a las instalaciones de Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión FEADLE ubicada en la calle de López No. 12 en el segundo piso en el Centro Histórico de la Ciudad de México del ingreso y salida de ex servidor público ANGEL CLAUDE ARROYO ORTIZ de las siguientes fechas:*

AÑO 2014:

23 de septiembre del 2014, 22, 23, 24, 25, 28, 30 y 31 de octubre y 13 de noviembre del año 2014

Año 2015:

del 27, 28 y 29 de enero, 16 de febrero, 24 y 25 de marzo, 15 de abril, 19, 26 y 29 de junio del año 2015

Y en el caso de no tener el registro de asistencias de los días antes señalados informe de que otra manera se registró la asistencia en la entrada y salida en las fechas señaladas y si asistió algún curso de capacitación por lo cual dejo de registrar asistencia." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM y SEIDF.

PGR/CT/ACDO/488/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la entrega de la versión pública de las documentales solicitadas, testando datos de personal sustantivo que aparezcan en ellas; lo anterior, con fundamento en el artículo 110, fracción V de la LFTAIP. Por lo que, se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. Que el divulgar información perteneciente a personal sustantivo de esta Institución representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Que derivado de que las actuaciones de la Procuraduría General de la República tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un



riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.

- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de la Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales. -----

B.4. Folio 0001700187917

Contenido de la Solicitud: *"Solicito una copia digital de cada contrato que haya celebrado esta dependencia con la empresa Televisa SA de CV, Televimex, Editorial Televisa y en general todas las filiales y empresas que estén relacionadas con Televisa, desde el año 2006 a la fecha de esta solicitud."* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM y DGCS.

PGR/CT/ACDO/489/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la clasificación de confidencialidad de los datos personales visibles en los contratos localizados por la DGCS y que se enlistan a continuación:

- PGR/AD/CN/SERV/061/2008
- PGR/AD/CN/SERV/225/2008
- PGR/AD/CN/SERV/034/2009
- PGR/AD/CN/SERV/062/2010
- PGR/AD/CN/SERV/054/2011
- Convenio modificadorio 1 PGR/AD/CN/SERV/054/2011
- PGR/AD/CN/SERV/214/2011
- PGR/AD/CN/SERV/088/2012
- PGR/AD/CN/SERV/014-8/2015
- PGR/AD/CN/SERV/004-9/2016

Y por ende, la aprobación de las versiones públicas de los citados instrumentos jurídicos, de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP, que a la letra dice así:

ARTÍCULO 113. *Se considera información confidencial:*

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Asimismo, se precisa que los "Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (en adelante Lineamientos Generales)", disponen lo siguiente:

TRIGÉSIMO SEGUNDO. *Será confidencial la información que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable...*



CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

TRIGÉSIMO TERCERO. Los datos personales serán confidenciales independientemente de que hayan sido obtenidos directamente de su titular o por cualquier otro medio”.

Por lo anterior, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

En consecuencia, se hace de su conocimiento que los Lineamientos Generales establecen lo siguiente:

QUINCUAGÉSIMO SEXTO. La versión pública del documento o expediente que contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, será elaborada por los sujetos obligados, previo pago de los costos de reproducción, a través de sus áreas y deberá ser aprobada por su Comité de Transparencia.

This image shows a single page of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

B.5. Folio 0001700211217

Contenido de la Solicitud: *"Copia simple del acuerdo de abstención de investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática contra Alejandro Solalinde, o en su defecto del documento mediante el cual se realiza la abstención."* (Sic)

Otros datos para facilitar su localización: *"La información anterior se hizo publica en la cuenta de Twitter de Santiago Nieto Castillo."* (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: DGCS y FEPADE.

PGR/CT/ACDO/490/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por mayoría de votos, **confirma** la puesta a disposición de la versión pública del documento solicitado, derivado de que la FEPADE manifestó que dicha información se hizo del conocimiento público en la cuenta oficial de Twitter de dicha Fiscalía, además de que en los estrados de la misma se encuentra pública parte del acuerdo de abstención requerido. Lo anterior clasificando nombres y firmas de personal sustantivo y datos personales de personas físicas identificadas o identificables, con fundamento en el artículo 110, fracción V y 113, fracción I de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años para la información reservada.

Por lo que se proporciona la siguiente prueba de daño:

- I. Es un riesgo real, demostrable e identificable, el revelarse la identidad al público en general, de los servidores públicos involucrados en las actuaciones, al tratarse de personal sustantivo, pondría en riesgo real su integridad, así como la de sus familiares o personas cercanas, ya que al ser identificados, pueden ser vulnerables de conductas tendientes a dañarlos o bien ser blanco de represalias, por esta u otras investigaciones y/o determinaciones, por tal motivo al dar a conocer la versión pública sin reservar los datos de los servidores públicos que realizan tareas sustantivas, pondría en riesgo real la vida y seguridad de estos, ya que podrían obtenerse sus datos mediante coacción o amenazas sobre los servidores públicos.
- II. Asimismo, en cuanto a la superioridad de interés público de dar a conocer el nombre de los servidores públicos de esta Institución, pondría en riesgo la integridad física, la vida de una persona y la de sus familiares por ser personal sustantivo de esta Institución, mismos que resultan de especial prevalencia y protección, por lo que se encuentran por encima del interés público, respecto de la información en posesión de los sujetos obligados, es decir, no resulta una consecuencia apegada a los principios de los derechos humanos poner en riesgo la vida e integridad de una persona por satisfacer el derecho a la información de otra, por tal motivo se deben proteger los



datos que contengan información que haga identificable a alguna persona y más aún al tratarse de servidores públicos que realizan actividades sustantivas para la Institución.

- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, es de estimarse que resguardar únicamente la información que haga identificable al personal cuya área de adscripción sea alguna de las que coadyuve a funciones sustantivas, pondría al descubierto la identificación de los servidores públicos de los mismos, lo que resulta la medida y proporcionalidad entre el derecho de acceso a la información y el resguardo de la integridad personal y seguridad de los servidores públicos de esta Fiscalía, así como la de los familiares y personas cercanas. -----

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. On the right side, there is a small portion of a blue circular object, possibly a binder ring or a clip, which is partially visible. The rest of the page is empty except for the lines.

B.6. Folio 0001700213617

Contenido de la solicitud: "NOMBRAMIENTO DEL LIC. EDUARDO CRUZ GOMEZ" (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: OM.

PGR/CT/ACDO/491/2017: En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad, **confirma** la entrega de la versión pública del formato único de personal del C. Eduardo Cruz Gómez, testando datos personales como lo es CURP, sexo, edad, lugar de nacimiento, nacionalidad, domicilio, teléfono particular, entre otros; de acuerdo con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Artículo 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

En relación con ellos, los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas*, disponen:

Trigésimo Segundo. **Será confidencial la información que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable...**

...

Trigésimo Tercero. **Los datos personales serán confidenciales independientemente de que hayan sido obtenidos directamente de su titular o por cualquier otro medio.**

Trigésimo octavo. **Se considera información confidencial:**

I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;

II. **La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados**, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

...

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.

C. Solicitudes de acceso a la información en las que se determina la ampliación de término:

PGR/CT/ACDO/492/2017: Los miembros del Comité de Transparencia determinaron autorizar la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP. Lo anterior, en virtud de que las unidades administrativas responsables de dar respuesta a las mismas se encuentran realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos, para estar en posibilidad de determinar, en cada caso la publicidad, clasificación o inexistencia de la respuesta a los siguientes folios:

- C.1. Folio 0001700192017
- C.2. Folio 0001700197417
- C.3. Folio 0001700197617
- C.4. Folio 0001700198117
- C.5. Folio 0001700198217
- C.6. Folio 0001700198317
- C.7. Folio 0001700198417
- C.8. Folio 0001700198517
- C.9. Folio 0001700198617
- C.10. Folio 0001700198717
- C.11. Folio 0001700198817
- C.12. Folio 0001700198917
- C.13. Folio 0001700199017
- C.14. Folio 0001700199117
- C.15. Folio 0001700199217
- C.16. Folio 0001700199317
- C.17. Folio 0001700199417
- C.18. Folio 0001700199517
- C.19. Folio 0001700199617
- C.20. Folio 0001700199717
- C.21. Folio 0001700199817
- C.22. Folio 0001700199917
- C.23. Folio 0001700200017
- C.24. Folio 0001700200117
- C.25. Folio 0001700200217
- C.26. Folio 0001700200717
- C.27. Folio 0001700202317
- C.28. Folio 0001700202617
- C.29. Folio 0001700202917
- C.30. Folio 0001700203017
- C.31. Folio 0001700203717
- C.32. Folio 0001700205217
- C.33. Folio 0001700205817
- C.34. Folio 1700100025717 – Agencia de Investigación Criminal

Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación

de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma.


Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LFTAIP, el cual establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible.

D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analizan los cumplimientos a las resoluciones del INAI.

D.1. Folio 0001700134817– RRA 3763/17

Las resoluciones adoptadas por unanimidad de los miembros del Comité se encuentran al final de la presente acta.

No se presentaron asuntos para esta sesión.

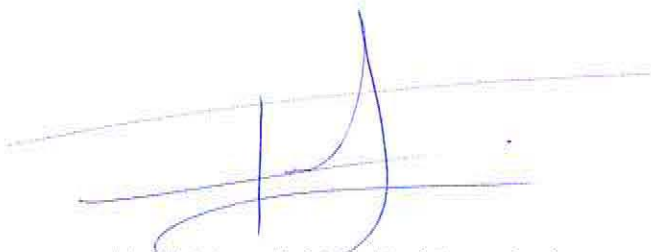
Three handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the same person, are written across the bottom of the page. The signatures are fluid and cursive, with varying lengths and styles.

Siendo las 12:58 horas del mismo día, se dio por terminada la Trigésima Sesión Ordinaria del año 2017 del Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES.



Mtra. Delia Ludivina Olmos Díaz
Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y
Presidenta del Comité de Transparencia.



Lic. Adriana Fabiola Rodríguez León.
Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales,
responsable del Área Coordinadora de Archivos de la Dependencia.



Lic. Luis Grijalva Torrero.
Titular del Órgano Interno de Control.